



NUE 2-FR-2021

Falta de Respuesta

xxxxxx xxxxxxxx contra Tribunal del Servicio Civil

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con tres minutos del día treinta de agosto de dos mil veintiuno.

Descripción del caso

I. El 2 de febrero del presente año, **xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx** presentó solicitud por la supuesta falta de respuesta de la oficial de información del **Tribunal del Servicio Civil (TSC)**, a sus solicitudes con referencias UAIP 04-2021 y UAIP 05-2021, de fechas 11 y 12 de enero de 2021, respectivamente.

En ese sentido, respecto a la delimitación realizada en el auto de admisión del presente caso, la información requerida por el peticionario el día 11 de enero del presente año, solicitud UAIP 04-2021, consistió en: *“1- Copia certificada de las funciones del puesto de Jefe de Apoyo Administrativo; 3- Copia Certificada del Acuerdo de Nombramiento de todas las Comisiones encargadas de elaborar el proyecto de reglamento o normas técnicas de control interno específicas del Tribunal de Servicio Civil, desde el dos mil diecisiete a la fecha o sea dos mil veintiuno”*.

Asimismo, la información solicitada el día 12 de enero del mismo año, solicitud UAIP 05-2021, se delimitó a lo concerniente en: *“1- Copia certificada del Acuerdo u orden en donde se acepta la renuncia de la Licenciada Maria Antonieta Garay Estrada como integrante de la comisión para realizar el proyecto de normas técnicas de control interno específicas del Tribunal de Servicio Civil; 2- Copia Certificada de los dos últimos proyectos presentados a la Corte de Cuentas de la República, de las normas técnicas de control interno específicas del Tribunal de Servicio Civil; 3- Copia certificada del Inventario Institucional y hasta qué fecha se encuentra actualizado; 5- Copia certificada del diagnóstico institucional para el fortalecimiento del sistema de control interno del Tribunal de Servicio Civil y de no existir hacer referencia de tal situación.”*

Al respecto, en el auto de admisión pronunciado por este Instituto a las quince horas con

diez minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la oficial de información del TSC, que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la correspondiente notificación, remitiera el expediente administrativo de la tramitación de la solicitud, de conformidad con el Art. 82 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). De igual manera en dicho auto, se confirió traslado a la oficial, para que ejerciera su derecho de defensa y expresara las razones por las cuales había omitido brindar respuesta a la solicitud del ciudadano.

En virtud de lo anterior, en fecha veintiuno de mayo del año en curso, la referida oficial de información remitió a este Instituto el expediente administrativo solicitado. Del mismo modo, el día veintiocho del mismo mes y año, el titular del ente obligado presentó el informe de defensa, por medio de su apoderado, licenciado Nestor Edenilson Portillo Rodríguez.

En el escrito de defensa, el apoderado en lo medular manifestó, por una parte, que de conformidad con los Arts. 97 y 98 de la LAIP, pretende desestimar el recurso de apelación por haberse presentado de forma extemporánea, y por otra, expresó que en su momento se le indicó a **xxxxxx xxxxxxxx**, que la información requerida estaba siendo recabada. Asimismo, señaló que debido a la carga laboral de la oficial de información, no fue posible dar respuesta inmediata al solicitante, siendo que a la fecha la oficial fue trasladada a otro departamento del TSC, por lo que luego del traslado les tomó tiempo designar a un nuevo oficial de información debido a otros cambios de personal.

Análisis del caso

El análisis jurídico del presente caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** consideraciones sobre los argumentos contenidos en el informe remitido por el apoderado del Tribunal de Servicio Civil; **(II)** determinación de la configuración de la falta de respuesta alegada; y, **(III)** naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito.

I. De los argumentos expuestos por el apoderado del ente obligado, en el informe de defensa remitido a este Instituto, es preciso hacer varias acotaciones.

A. Del incidente de improcedencia por extemporaneidad.

En el escrito de defensa, el apoderado del TSC pretende interponer incidente de

improcedencia del recurso de apelación de conformidad con los Arts. 82, 83, 97 literal “a” y 98 de la LAIP, en razón de haber sido interpuesto de forma extemporánea, pues alude que el solicitante tenía un plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso, tal como lo señala la LAIP.

Al respecto, es conveniente ilustrar al ente obligado que conforme a la normativa vigente en materia de procedimientos administrativos, el plazo de interposición del recurso de apelación normado en el Art. 82 de la LAIP se modificó a 15 días hábiles, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 135, 163, 164 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

Aunado a lo anterior, es oportuno aclarar que el presente caso que nos atañe no se ventila bajo el procedimiento de apelación contemplado en las disposiciones normativas de la LAIP, puesto que se tramita mediante el procedimiento especial de falta de respuesta previsto en el Art. 75 de la LAIP, el cual establece un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que la oficial de información debió dar respuesta a la solicitud, para presentar la respectiva actuación ante este Instituto.

Por lo tanto, del contenido del escrito presentado por **xxxxxx xxxxxxxx** y del análisis del expediente administrativo, se advierte que los plazos para dar respuesta vencieron los días 29 de enero -para la primera solicitud- y 1 de febrero -para la segunda solicitud-, ambos del presente año, debido a la prórroga solicitada por la oficial para entregar la información. En consecuencia, el escrito para dilucidar la falta de respuesta fue presentado a este Instituto dentro del plazo legal establecido en la disposición señalada.

Por lo antes expuesto, es pertinente declarar no ha lugar el incidente de improcedencia interpuesto por el licenciado Portillo Rodríguez, dado que no se configuran los presupuestos alegados en su escrito de defensa.

B. De la actuación de la oficial de información.

Del mismo modo, el apoderado del TSC continuó manifestando, que la actuación de la oficial de información ha sido justificada y dentro de los límites al marco legal aplicable de conformidad con los Arts. 20 y 146 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), arguyendo que para el caso en concreto, con base al principio de suspensión de plazos y por circunstancias

internas de la institución, no se pudo cumplir con los tiempos establecidos en la LAIP.

En ese contexto, expresó que a inicios del año 2021, se realizaron cambios relacionados al personal, teniendo como resultado de dicha reestructuración, el traslado de la oficial de información, licenciada xxxxxxxx xxxxxxxx, al departamento jurídico del ente obligado, desde el día 19 de febrero del año en curso. Para tal efecto, presenta como prueba copia del acuerdo número 13 emitida por el TSC el día 19 del mismo mes y año. Asimismo, prosigue enunciando que debido a la excesiva carga laboral de la oficial, no le fue posible dar respuesta inmediata al ciudadano xxxxxxxx xxxxxxxx. En ese sentido, afirma que existe una causa justificante de fuerza mayor, ya que los cambios referidos coinciden con las fechas en que el solicitante presentó sus solicitudes de información.

Dicho lo anterior, resulta acertado aclarar que este Instituto se rige por lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), su Reglamento RELAIP y la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). De ahí que, el argumento sobre la suspensión del plazo no es apropiado, dado que, el Art. 10 del Lineamiento para Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, prevé únicamente la interrupción del plazo, en los casos en que se haya realizado una prevención al solicitante, no así una suspensión.

En consecuencia, de lo manifestado por el ciudadano solicitante y del contenido de la documentación remitida por el ente obligado, se observa que tal situación no se aplica al caso, puesto que no hay evidencia de que se haya prevenido al ciudadano. Por lo tanto, la oficial de información debió dar una respuesta en el plazo legal establecido.

Por otra parte, de la prueba remitida por el licenciado xxxxxxxx xxxxxxxx, consistente en el acuerdo número 13, de fecha 19 de febrero del año en curso, sin duda, demuestra el traslado de puestos de la oficial; no obstante, en vista de haberse suscrito con fecha posterior a la que debió dar respuesta, dicho acuerdo no excusa la omisión de la referida servidora pública. Por tanto, este Instituto estima que no es prueba suficiente para justificar la actuación de la entonces oficial de información.

II. Siendo evidente la obligación de los entes obligados de dar respuesta a toda solicitud de información que los ciudadanos le presenten, es preciso determinar si se ha configurado la falta de respuesta alegada por el peticionario.

El solicitante afirmó que luego de interponer su solicitud de información, se le notificó que se ampliaría el plazo de entrega de la información, por un período de 5 días hábiles, respectivamente; no obstante, a la fecha de presentar el escrito a este Instituto, no había recibido respuesta de fondo por parte del ente obligado.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el Art. 75 de la LAIP, establece que la falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo establecido habilitará al solicitante para acudir ante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes, para determinar si la información es pública y eventualmente ordene su entrega.

Para el caso en comento, las solicitudes de información del ciudadano fueron interpuestas ante la oficial de información de TSC, los días 11 y 12 de enero del presente; en ese sentido y tomando en cuenta que el último día para recibir las respuestas de dichas solicitudes fue el 29 de enero y el 1 de febrero respectivamente, ambas fechas del mismo año.

En consecuencia, se ha determinado que la solicitud para el presente procedimiento de falta de respuesta fue interpuesta ante este Instituto el 2 de febrero del corriente año; es decir, dentro del plazo para ser admitida y darle el trámite correspondiente. Por ende, la falta de pronunciamiento por parte del ente obligado activa la garantía para el administrado, reconocida a través del procedimiento especial establecido en el Art. 75 de la LAIP. En conclusión, cuando el ciudadano acudió a este Instituto aún no había recibido la información solicitada, por lo que la falta de respuesta quedó configurada.

III. En reiteradas ocasiones se ha sostenido por parte de este Instituto, que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (en adelante DAIP), el principio más relevante es el de máxima publicidad o máxima divulgación.

En tal sentido, una de las consecuencias más significativas de este principio, establece que en esencia toda la información que haya sido producida por el Estado o se encuentre en su poder o administración se presumirá pública, y sólo podrá restringirse su acceso cuando se demuestre por parte del ente público que concurre una causa justificada reconocida legalmente.

Ahora bien, el Art. 6 letra “c” de la LAIP establece que la información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o

actividades que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial.

Asimismo, este Instituto ha reconocido que el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclado en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (Art. 6 de la Constitución) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho (Art. 85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos¹.

Al analizar lo solicitado por el peticionario, se observa que dicha información en principio, se trata de información pública, ya que no es posible enmarcarla dentro de los supuestos contemplados en el Art. 19 de la LAIP y las causales para determinar que cierta información sea reservada; y tampoco es posible enmarcarlo en las causales del Art. 24 de la LAIP sobre la información confidencial.

Por otro lado, el mismo Art. 6 LAIP define la información pública oficiosa como aquella que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de la LAIP y sin necesidad de solicitud directa. Este tipo de información siempre debe estar a disposición del público, debe divulgarse y actualizarse constantemente para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Por ello, el Art. 10 de la LAIP, establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán oficiosamente poner a disposición y conocimiento de los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, corresponde ahora determinar la naturaleza de la información solicitada por el ciudadano **XXXXXXXX XXXXXXXX** en la solicitud bajo referencia **UAIP 04-2021**, consistente en: *“1- Copia certificada de las funciones del puesto de Jefe de Apoyo Administrativo; y, 3- Copia Certificada del Acuerdo de Nombramiento de todas las Comisiones encargadas de elaborar el proyecto de reglamento o normas técnicas de control interno específicas del Tribunal de Servicio Civil, desde el dos mil diecisiete a la fecha o sea dos mil veintiuno”*.

¹ Resolución pronunciada por este Instituto a las nueve horas con veinte minutos del nueve de septiembre de dos mil trece. REF. NUE 22-A-2013.

En cuanto al ítem 1, este Instituto advierte que la información solicitada se enmarca dentro de lo previsto en el Art. 10 numeral 1 de la LAIP, dado que las funciones asignadas a cada cargo dentro de una institución, se encuentran establecidas en los manuales de cargos y funciones. Por lo tanto, al ser los manuales parte del marco normativo de la institución, la misma se clasifica como oficiosa. De igual forma lo ha establecido en el Art. 1.1 del Lineamiento No. 2 Para la Publicación de Información Oficiosa.

Respecto al ítem 3, la información requerida se enmarca en la clasificación de información oficiosa, por lo que, la disposición legal antes citada establece que los entes colegiados deben publicar las actas que emitan. Asimismo, el Art. 1.23 del Lineamiento No. 2 Para la Publicación de Información Oficiosa, prevé la misma clasificación.

Ahora bien, con relación a la información requerida en la solicitud con referencia **UAIP 05-2021**, concerniente en: *“1- Copia certificada del Acuerdo u orden en donde se acepta la renuncia de la Licenciada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx como integrante de la comisión para realizar el proyecto de normas técnicas de control interno específicas del Tribunal de Servicio Civil; 2- Copia Certificada de los dos últimos proyectos presentados a la Corte de Cuentas de la República, de las normas técnicas de control interno específicas del Tribunal de Servicio Civil; 3- Copia certificada del Inventario Institucional y hasta qué fecha se encuentra actualizado; 5- Copia certificada del diagnóstico institucional para el fortalecimiento del sistema de control interno del Tribunal de Servicio Civil y de no existir hacer referencia de tal situación.”*

Respecto a la información relativa a *“copia certificada del Acuerdo u orden en donde se acepta la renuncia de la licenciada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx como integrante de la comisión para realizar el proyecto de normas técnicas de control interno específicas del Tribunal del Servicio Civil”*; concerniente al **ítem 1** de la solicitud de información, es oportuno establecer que dicho acuerdo se enmarca en lo previsto en el Art. 1.23 del Lineamiento No. 2 Para la Publicación de Información Oficiosa.

En atención a lo anterior, se deduce que la información requerida es de naturaleza pública oficiosa, al corresponder a las actas emitidas por un ente colegiado -TSC para el caso que nos ocupa-. No obstante, se advierte que la misma contiene datos personales de un tercero, es decir,

información confidencial, dado que versa sobre la renuncia de una servidora pública, quien ha sido individualizada por el apelante como integrante de una comisión del TSC.

Por lo que, este Instituto como garante del DAIP y del Derecho a la Protección de Datos Personales (DPDP), en aras de garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano **XXXXXXXX XXXXXXXX**, considera factible ordenar la entrega de la información solicitada cumpliendo los presupuestos establecidos en el Art. 30 de la LAIP; es decir, que el TSC deberá entregar dicho acuerdo en versión pública, a fin de garantizar la protección de los datos personales de terceros que hubiesen sido consignados en el documento solicitado. Es así que, al contener dicha acta el nombre/s de empleados públicos, este dato deberá ser resguardado, a excepción de los nombres de los titulares o máxima autoridad del TSC (si aparecieran).

En esa línea, el requerimiento realizado en los **ítems 2 y 5** hace alusión a normas de control interno, por lo tanto, se deduce que dicha información forma parte del marco normativo, con base a lo dispuesto en el Art. 10 numeral 1 de la LAIP y el Art. 1.1 del Lineamiento No. 2 Para la Publicación de Información Oficiosa. Por lo tanto, es procedente ordenar la entrega de las copias certificadas requeridas por el apelante.

Por otra parte, lo requerido por el ciudadano **XXXXXXXX XXXXXXXX**, en el **ítem 3** referente al inventario institucional, se enmarca en lo previsto en el numeral 14 de la disposición legal antes citada y el Art. 1 número 1.13 del Lineamiento No. 2 Para la Publicación de Información Oficiosa.

De modo que, al tratarse de bienes adquiridos con fondos públicos, no existe restricción alguna para no hacer entrega de dicha información, lo cual permite que el ciudadano ejerza control sobre las finanzas públicas que sufraga a través de sus impuestos.

En virtud de lo anterior, es procedente ordenar al **Tribunal del Servicio Civil**, a través de su oficial de información, que en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue al ciudadano **XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** la información detallada en su solicitud de información. En otras palabras, de lo requerido en la solicitud con referencia UAIP 04-2021, el ente obligado por medio de su oficial de información debe entregar lo requerido en el ítem 1 y 3; en cuanto al requerimiento de información realizado

en la solicitud con referencia UAIP 05-2021, debe entregar lo referente a los ítem 1, 2, 3 y 5, en los términos solicitados por el apelante.

Cabe aclarar, que si en el contenido de la información solicitada existieran datos personales sensibles de terceros, la persona que custodia la misma debe realizar la correspondiente versión pública. En concreto, si estos datos son concernientes a nombres de empleados públicos deberán resguardarse, a efecto de no afectar su derecho a la intimidad personal, pero debiendo entregar en dicha información, los nombres correspondientes a los funcionarios públicos, es decir, de los titulares o máxima autoridad de la institución (en caso que hayan sido consignados en alguno de los documentos solicitados).

Decisión del caso

De conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas y los artículos 6 y 85 de la Constitución de la República; 2, 30, 58 letras a) y b), 75, 94, 96 y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), este Instituto **resuelve**:

a) Tener por remitido, de forma digital, el expediente administrativo relacionado con el presente caso.

b) Tener por rendido el informe por parte del apoderado del **Tribunal del Servicio Civil**.

c) Ordenar al titular o máxima autoridad del **Tribunal del Servicio Civil** que, a través de su oficial de información, en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue al ciudadano **XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** la información detallada en su solicitud de información de referencia *UAIP 04-2021*, correspondiente a los *ítems 1 y 3*; y, en cuanto al requerimiento de información realizado en la solicitud con referencia *UAIP 05-2021*, debe entregar lo que corresponda a los *ítems 1, 2, 3 y 5*, en los términos dispuestos en esta resolución, únicamente en cuanto a la delimitación en materia de acceso a la información pública. De proceder conforme a la LAIP, debe entregarse en versión pública, resguardando los nombres de empleados no así de los titulares o máxima autoridad de la institución que contenga la información solicitada.

d) Ordenar al titular o máxima autoridad del **Tribunal del Servicio Civil** que, a través de su oficial de información, en el término de veinticuatro horas después de finalizado el plazo mencionado en el literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

e) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo sólo cabe el recurso de reconsideración, no siendo necesario agotar la vía administrativa por ser de carácter potestativo, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

Notifíquese.-

-----DHS-----AGREGORI-----GERARDOJGUERRERO-----
**PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN""""""""""RUBRICADAS""""""""""**
IC/JH